

¿La gran transformación verde? El Pacto Verde Europeo y las protestas agrícolas desde una perspectiva polanyiana

The great green transformation? The European Green Deal and agricultural protests from a Polanyian perspective

Agata Breczko *

Resumen

El artículo analiza las protestas agrícolas en Europa desde una perspectiva polanyiana, interpretándolas como un contramovimiento frente a las transformaciones impulsadas por la transición verde. Argumenta que el Pacto Verde Europeo no representa una ruptura con el mercado, sino su reconfiguración bajo nuevas formas “verdes”. A partir de una base de datos de protestas (ACLED) y análisis de contenido, se identifican cuatro ejes principales de descontento en seis países analizados: competencia comercial, regulación ambiental, presiones económicas y demandas de apoyo estatal. Los resultados muestran cierta heterogeneidad entre países, lo que dificulta extraer conclusiones sobre la existencia de un contramovimiento agrícola europeo de carácter supranacional, pero también evidencian la presencia de patrones comunes, en particular la combinación de una creciente liberalización comercial con regulaciones supranacionales más estrictas, que generan presiones sobre costos y precios.

Palabras clave: protestas agrícolas, Pacto Verde Europeo, doble movimiento

Abstract

This article analyzes agricultural protests in Europe from a Polanyian perspective, interpreting them as a countermovement against the transformations driven by the green transition. It argues that the European Green Deal

* Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, México

does not represent a rupture with the market, but rather its reconfiguration under new “green” forms. Drawing on a protest database (ACLED) and content analysis, the study identifies four main axes of discontent across six analyzed countries: trade competition, environmental regulation, economic pressures, and demands for state support. The results reveal a certain degree of heterogeneity among countries, making it difficult to draw definitive conclusions regarding the existence of a supranational European agricultural countermovement. However, at the same time, they show the presence of common patterns, particularly the combination of increasing trade liberalization and stricter supranational regulations, which generate pressures on costs and prices.

Keywords: agricultural protests, European Green Deal, double movement

I. Introducción: sobre la necesidad de una gran transformación verde

La crisis climática ha dejado de ser una externalidad para convertirse en un eje estructurante del capitalismo contemporáneo, impulsando una creciente intervención estatal orientada a reconfigurar la relación entre la economía y la naturaleza. En este contexto, la transición verde ha sido interpretada, desde una perspectiva polanyiana, como un posible contramovimiento destinado a limitar los efectos de la mercantilización sobre una de sus “mercancías ficticias” fundamentales: la tierra, entendida como naturaleza o sistema socioecológico.

Sin embargo, este proceso dista de ser lineal. Lejos de generar una dinámica coherente de protección, la transición ecológica puede dar lugar a tensiones entre distintas formas de protección social. En particular, las políticas orientadas a limitar el impacto ambiental pueden entrar en conflicto con aquellas dirigidas a resguardar condiciones materiales de subsistencia, como el empleo y los ingresos. En este sentido, la crisis climática no solo reconfigura el doble movimiento, sino que complejiza su funcionamiento, dando

lugar a escenarios en los que un contramovimiento puede oponerse a otro.

Este trabajo analiza esta dinámica en el contexto de la Unión Europea (UE), tomando como caso el Pacto Verde Europeo (Pacto Verde o PVE) y las protestas agrícolas que se han extendido por la región en los últimos años. El argumento central sostiene que, si bien el PVE puede interpretarse como un intento de re-incrustar la economía dentro de límites ecológicos, su implementación mediante instrumentos de mercado y mecanismos regulatorios genera presiones distributivas que desencadenan respuestas sociales en el sector agrícola. Estas respuestas no constituyen necesariamente un contramovimiento coherente y unificado a nivel supranacional, sino que adoptan formas fragmentadas y diferenciadas entre países, aunque articuladas en torno a problemáticas compartidas.

Metodológicamente, el artículo combina herramientas cualitativas y cuantitativas a partir de un análisis de contenido asistido por técnicas de minería de texto y aplicado a la base de datos del Proyecto de Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos (ACLED). A partir de un subconjunto de movilizaciones agrícolas en seis países europeos entre 2020 y 2024, se identifican patrones en las demandas que permiten examinar la relación entre regulación ambiental, presiones económicas y competencia internacional.

En conjunto, el trabajo contribuye a la literatura polanyiana al mostrar que, en el contexto de la transición verde, el doble movimiento no se expresa únicamente como una oposición entre mercado y sociedad, sino como una tensión entre distintos proyectos de protección, lo que plantea interrogantes sobre la coherencia y viabilidad de los contramovimientos en el capitalismo contemporáneo.

Tras esta introducción, la primera sección presenta el marco teórico del doble movimiento en Polanyi. La segunda analiza el Pacto Verde Europeo como un posible contramovimiento orientado a la protección de la naturaleza, mientras que la tercera examina la respuesta de los agricultores como un segundo contramovimiento frente a sus implicaciones. Finalmente, se ofrecen algunas conclusiones.

II. El doble movimiento de Polanyi

El presente trabajo se inscribe en el marco analítico de Karl Polanyi, particularmente en su crítica al mito del mercado autorregulado. Para Polanyi, el mercado no constituye un orden natural guiado por “manos invisibles”, sino una construcción política e institucional. En sus propios términos, el *laissez-faire* no emergió de forma espontánea, sino que fue deliberadamente planificado e, incluso, impuesto por el Estado liberal [Polanyi, 2007 [1944]: 230-231, 233]. En consecuencia, la economía de mercado moderna descansa sobre una intervención estatal constante que crea, expande y sostiene las condiciones para su funcionamiento *libre*, lo que convierte al Estado en un verdadero habilitador de mercado (*market maker*).

Para Polanyi, la idea de un mercado autorregulado es utópica no solo en el sentido de ser normativamente deseada por el pensamiento liberal, sino también en tanto proyecto inalcanzable por las contradicciones internas que genera. En particular, su reproducción requiere la mercantilización de tres elementos fundamentales —tierra, trabajo y dinero— que Polanyi denomina “mercancías ficticias”, dado que no fueron originalmente producidas para su intercambio en el mercado.

La tierra, entendida como naturaleza, es transformada en recurso explotable bajo criterios de rentabilidad; el trabajo, como actividad humana, es reducido a fuerza laboral sujeta al salario; y el dinero,

como construcción social fundamental para el intercambio, es tratado como mercancía cuyo precio —el interés— puede generar ganancias, llevando a creciente especulación e inestabilidad. Además, la subordinación de estas tres esferas a la lógica mercantil conduce a la desincrustación (*disembedding*) de la economía respecto de la sociedad, generando dislocaciones estructurales al someter dimensiones sociales, culturales y ecológicas a los mecanismos de oferta y demanda.

Como resultado, el proyecto de un mercado plenamente autorregulado se vuelve inviable y poco realista en la práctica: las tensiones que produce internamente desencadenan respuestas sociales orientadas a limitar sus efectos. Es en este contexto, emerge el doble movimiento —concepto central en el pensamiento de Polanyi—, entendido como la dinámica conflictiva entre, por un lado, la expansión del mercado libre (desincrustado de la sociedad), impulsada por sus defensores como los actores económicos y respaldada por el Estado liberal (el movimiento liberal); y, por otro, los contramovimientos que buscan proteger a la sociedad y la naturaleza mediante mecanismos de regulación, legislación y acción colectiva, orientados a reinsertar o re-incrustar la economía en el control social y político. Este marco permite entender el capitalismo no como un sistema estable ni de equilibrios, sino como una dinámica conflictiva y recurrente entre la expansión del mercado y las fuerzas sociales que buscan contenerla.

A este doble movimiento, se le puede dar una lectura “blanda” o “dura” [Sandbrook, 2022: 648]. La interpretación “dura”, asociada a tradiciones marxistas, sostiene que la tensión entre mercantilización y protección social es estructural e irresoluble dentro del capitalismo y, por lo tanto, solo podría superarse mediante una transformación sistémica, es decir, más allá de la economía de mercado, a través de la emancipación [Fraser, 2014: 555]. A diferencia, la lectura “blanda”, más cercana a la tradición socialdemócrata, plantea que estas tensiones pueden ser contenidas

mediante mecanismos de regulación y redistribución, sin implicar una ruptura sistémica, sino su reforma interna. Desde esta perspectiva, el doble movimiento no necesariamente conduce a una transformación estructural, sino que describe una dinámica recurrente de expansión y contención del mercado, entendida como la oscilación en el poder relativo entre el movimiento liberal y sus contramovimientos [Sandbrook, 2022: 648]

Especialmente bajo esta segunda visión “blanda”, el concepto de doble movimiento —si bien fue formulado por Polanyi para explicar procesos históricos del siglo XIX— sigue siendo relevante para analizar el capitalismo contemporáneo. En esta interpretación, no se trata de una secuencia histórica cerrada, sino de un modelo abierto que se reconfigura en distintas fases del desarrollo capitalista Sandbrook [2022].

Una primera manifestación de esta dinámica fue el liberalismo incrustado (*embedded liberalism*) descrito por Ruggie [1982], que surgió tras la Segunda Guerra Mundial como una solución institucional al doble movimiento. Este arreglo combinaba la apertura económica internacional —estructurada en torno a regímenes multilaterales, particularmente en el marco de las instituciones de Bretton Woods y del sistema oro-dólar— con una mayor capacidad de intervención estatal a nivel nacional. Sustentado en el llamado consenso keynesiano, este modelo permitió contener, aunque no eliminar, las tensiones generadas por el mercado.

Este relativo equilibrio comenzó a erosionarse a partir de la década de 1970, con el fin del orden de Bretton Woods, el colapso del patrón oro-dólar y el creciente cuestionamiento de las políticas keynesianas en el contexto de la estanflación y las crisis petroleras. En este escenario, diversos autores han identificado la emergencia de un “segundo doble movimiento”, asociado a la expansión global del neoliberalismo y a las dislocaciones sociales que este ha

generado [Arrighi y Silver, 2003; Evans, 2008; Levien y Paret, 2012; Sandbrook, 2022].

Impulsado por un nuevo marco doctrinario que desplazó al consenso keynesiano —articulado en torno al Consenso de Washington y al Nuevo Consenso Macroeconómico— y reforzado tras la caída del Muro de Berlín y el colapso de la alternativa socialista [Levien y Paret, 2012: 724], este renovado impulso del movimiento liberal implicó una intensificación de la mercantilización a escala global y una nueva desincrustación de la economía respecto de la sociedad. Este proceso se tradujo en la expansión de políticas de privatización, liberalización financiera y comercial y desregulación laboral, acompañadas de austeridad fiscal y de una reducción tanto del papel como de las capacidades del Estado para intervenir en la economía [Polanyi-Levitt y Seccareccia, 2018].

A diferencia de etapas previas, esta expansión no se apoyó únicamente en el Estado nacional, sino también en la creciente institucionalización del libre mercado a nivel global y en la intervención activa de organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, a menudo considerados agentes clave en la difusión del neoliberalismo [Babb y Kentikelenis, 2018], en un contexto cada vez más globalizado e interdependiente.

A partir de las crisis recurrentes asociadas a este proceso durante la década de 1990 —particularmente en Asia y en América Latina—, emergió un conjunto de debates en torno al denominado posneoliberalismo. Estos debates se profundizaron tras la crisis financiera global de 2008 y, más recientemente, en el contexto de la pandemia. Diversos autores han coincidido en que el posneoliberalismo implica un retorno del Estado como actor más activo —particularmente en términos de redistribución y regulación—, pero sin abandonar la lógica de acumulación capitalista ni la economía de mercado [Dávalos, 2014; Ceceña, 2009; Borón, 2003].

Este giro se articula en torno a lo que se ha denominado un posconsenso de Washington [Stiglitz, 2008], orientado a promover un capitalismo “con rostro humano”, que incorpora mecanismos de compensación para mitigar sus propios efectos disruptivos —como pisos de gasto social o apoyos a sectores vulnerables— y que permite criterios de política más flexibles y contextuales. Asimismo, este posconsenso ha sido consolidado, legitimado y expandido a través de las mismas instituciones financieras internacionales que previamente impulsaron la agenda neoliberal [Güven, 2018].

En este sentido, más que una superación del neoliberalismo, se trataría de una fase de adaptación del sistema, en la que se combinan nuevas formas de intervención estatal con la persistencia de dinámicas de desposesión, extractivismo, financiarización y mercantilización. Este giro podría interpretarse, entonces, como un intento de reconfiguración del neoliberalismo en clave más regulada —una suerte de “neoliberalismo incrustado” en términos de Ruggie—, aunque sin implicar una ruptura sustantiva con sus fundamentos.

Sin embargo, la crisis ambiental contemporánea introduce una tensión adicional que pone en duda la capacidad adaptativa del capitalismo. La magnitud y la urgencia del cambio climático reducen la viabilidad de respuestas incrementales o de transición “suave”. A diferencia de crisis anteriores, que permitieron recomposiciones internas dentro del mismo sistema, el deterioro ecológico global sugiere que los márgenes para una re-incrustación “blanda” podrían estar agotándose, reabriendo así el debate sobre la necesidad de transformaciones mucho más profundas en los patrones de producción, consumo y acumulación [Adler, 2015].

En este contexto, todos los intentos por proteger la naturaleza podrían interpretarse, en principio, como una forma de contramovimiento. No obstante, algunos autores que aplican

explícitamente el marco polanyiano al cambio climático cuestionan la capacidad de las soluciones basadas en el mercado para constituir un contramovimiento efectivo. En particular, Stuart, Gunderson y Petersen [2019] distinguen entre respuestas “blandas” que profundizan la mercantilización —como la creación de los mercados de carbono o taxonomías verdes— y aquellas “duras” que realmente buscan re-incrustar la economía dentro de los límites ecológicos del planeta. Estos autores sostienen que los mecanismos de mercado no solo resultan insuficientes para abordar la crisis climática, sino que tienden a reproducir las contradicciones que la generan, al intentar resolver un problema derivado de la mercantilización mediante una mayor expansión del mercado, solo que ahora bajo formas “verdes”. En este sentido, lo que se presenta como “protección” puede operar, en realidad, como una extensión del propio proceso de mercantilización, configurando lo que algunos interpretan como un “falso contramovimiento” [Stuart, Gunderson y Petersen, 2019].

Al mismo tiempo, los esfuerzos por proteger la naturaleza, por necesarios que sean, no están exentos de costos. Estos costos de transición ambiental tienden a distribuirse de manera desigual entre sectores, territorios, grupos sociales e incluso países, generando nuevas tensiones y conflictos distributivos [Ascari, Colciago, Haber y Wöhrmüller, 2025]. Es precisamente esta dimensión distributiva la que abre la posibilidad de conflicto entre distintas formas de protección: por un lado, los intentos de subordinar la dinámica económica a los límites ecológicos; por otro lado, las respuestas orientadas a proteger condiciones materiales de subsistencia, como el empleo y los ingresos.

Este tipo de tensión resulta particularmente visible en el contexto europeo, donde los esfuerzos por re-regular la relación entre economía y naturaleza —a través del PVE— han sido acompañados por una creciente movilización de sectores agrícolas en respuesta a sus efectos económicos y regulatorios adversos. Este escenario

sugiere la coexistencia de respuestas sociales que, aun cuando todas se inscriben en lógicas de protección, pueden entrar en conflicto entre sí.

En este contexto, la posibilidad de que un contramovimiento se oponga a otro complejiza la noción misma de contramovimiento y plantea la necesidad de problematizar su contenido y alcance, evitando asumirlo de manera automática como cualquier forma de oposición o cualquier intento de “ponerle riendas” al libre mercado. En este sentido, además del ya mencionado “falso contramovimiento” [Stuart, Gunderson y Petersen, 2019], algunos autores han mostrado que el contramovimiento contemporáneo dista de ser coherente o unificado. Standing [2014: 971] lo caracteriza como una “composición peligrosa”, en la que convergen grupos sociales heterogéneos —desde minorías racializadas hasta trabajadores desplazados por la globalización y jóvenes educados pero sin perspectivas (el denominado *precariat*)— cuyas demandas no siempre son compatibles. Esta heterogeneidad no solo dificulta la articulación de un proyecto político o frente común, sino que también puede dar lugar a formas de movilización con orientaciones divergentes e incluso contradictorias, que en ciertos contextos pueden derivar en expresiones populistas, radicalizadas o políticamente excluyentes, incluyendo giros hacia la extrema derecha. En línea con ello, Levien y Paret [2012], a partir del análisis de la Encuesta Mundial de Valores durante la década de 1990, muestran la existencia de un contramovimiento latente, expresado en un creciente apoyo a la intervención estatal y en un cuestionamiento del neoliberalismo; sin embargo, este apoyo se encuentra social y territorialmente fragmentado, lo que limita la posibilidad de que alcance una incidencia política a nivel global o, al menos, regional.

A partir de este marco, resulta necesario abordar el contramovimiento no como una entidad dada y simple, sino como un fenómeno complejo que debe ser identificado y caracterizado en

contextos específicos. En este trabajo, ello implica analizar el contramovimiento en el marco de la transición verde europea mediante el estudio sistemático de las respuestas sociales, tanto en el plano institucional —a través de las políticas asociadas al PVE— como en su recepción y contestación por el sector agrícola.

Ahora bien, ¿cómo estudiar empíricamente el contramovimiento? Levien y Paret (2012) lo abordan a partir del estudio cuantitativo de actitudes y preferencias sociales utilizando datos de encuesta. En este trabajo, se adopta un enfoque complementario que combina herramientas cualitativas y cuantitativas mediante técnicas de análisis de contenido asistido por minería de texto. Para ello, se utiliza la base de datos ACLED, que recopila información sobre eventos de protesta a partir de reportes mediáticos.

A partir de esta base de datos, se construyó un subconjunto de protestas agrícolas para el periodo 2020-2024, con especial énfasis en 2024 como año de mayor intensidad de movilizaciones. Se seleccionó seis países —Francia, España, Grecia, Alemania, Polonia e Italia— en función del número absoluto de protestas registradas. El análisis se centra en el campo descriptivo de cada evento, que contiene información cualitativa sobre las demandas, el contexto y las características de las movilizaciones.

Con el fin de sistematizar esta información, se empleó un enfoque de codificación basado en diccionarios, identificando palabras y expresiones clave asociadas a distintas categorías analíticas, entre ellas: presión sobre costos y precios; competencia internacional percibida como desleal (incluido el contexto de la guerra en Ucrania); regulación ambiental vinculada al PVE; demandas relacionadas con política económica doméstica: desde peticiones de mayor apoyo estatal y compensaciones, hasta reclamos por recortes de subsidios agrícolas y por aumentos en impuestos agrícolas; así como preocupaciones relacionadas con los efectos del cambio climático y el uso del suelo (véase Anexo 1).

Si bien esta base presenta limitaciones —especialmente en términos de posibles sesgos de cobertura y simplificación de la información en su parte descriptiva—, el enfoque adoptado permite identificar patrones comparables entre países y vincular las demandas observadas con las transformaciones estructurales asociadas a la transición verde en Europa. Este marco empírico proporciona así el punto de partida para examinar el papel de las políticas ambientales europeas en la configuración de estas tensiones.

III. El Pacto Verde y la protección de la naturaleza en el capitalismo contemporáneo: ¿un falso contramovimiento?

La UE es un ejemplo particularmente valioso para el estudio del doble movimiento en la era de la crisis climática. Por un lado, promueve la liberalización económica, tanto a través del mercado único como mediante su política comercial externa; por otro, despliega mecanismos de regulación orientados a corregir o contener sus efectos, incluidos aquellos de carácter ambiental. Esta doble función convierte a la UE en un espacio privilegiado para observar cómo se reconfiguran las tensiones polanyianas en el capitalismo contemporáneo.

En este marco, el PVE, presentado en 2019 por la Comisión Europea, ocupa un lugar central. Antes de analizar las respuestas sociales que han emergido en el sector agrícola, resulta necesario situarlo analíticamente. Lejos de constituir únicamente una agenda ambiental, el Pacto Verde puede entenderse como un proyecto de transformación socioeconómica de gran alcance, orientado no solo a reducir emisiones o preservar la biodiversidad, sino también a reconfigurar las condiciones de producción, intercambio y regulación no solo en la economía europea, sino también global, en el contexto de la crisis climática.

En términos más concretos, el PVE busca alcanzar la neutralidad climática de la UE hacia 2050 a través de la descarbonización de

sus sistemas productivos [Comisión Europea, 2019: 5]. Al mismo tiempo, pretende articular esta transición con objetivos de competitividad y de liderazgo normativo global, posicionando a la UE como referente en la definición de los estándares ambientales a escala internacional, así como de autonomía estratégica, especialmente en materia energética, reduciendo la dependencia europea de los combustibles fósiles rusos [Lupiola, 2023]. En este sentido, la transición verde se caracteriza no solo por su dimensión técnica, sino por ser también profundamente política y geoeconómica.

Desde esta perspectiva, el PVE puede interpretarse como un intento de intervenir activamente en la organización del mercado, particularmente en relación con una de las mercancías ficticias centrales en el pensamiento de Polanyi: la tierra. Si el proceso histórico de mercantilización implicó la subordinación de la naturaleza a la lógica del mercado, la transición verde parecería, en principio, apuntar en la dirección opuesta: protegerla frente a su explotación irrestricta. Bajo esta lectura, el PVE podría interpretarse como la expresión de un contramovimiento orientado a re-incrustar la economía dentro de límites ecológicos que el capitalismo ha transgredido de manera sistemática desde la Revolución Industrial. Sin embargo, esta interpretación resulta insuficiente —e incluso simplista— si no se consideran las formas concretas mediante las cuales se implementa dicha protección.

Ello porque los mercados “verdes” no emergen de manera espontánea ni natural —al igual que en su momento incluso el *laissez-faire* fue planificado—, sino que son activamente contruidos y moldeados mediante instrumentos regulatorios, financieros y comerciales supranacionales. En este sentido, el PVE puede entenderse como una combinación de re-regulación (re-incrustación) y creación de mercado (*market-making*).

Por un lado, introduce normas vinculantes que buscan limitar directamente la acción del mercado: la Ley Europea del Clima (2021) convierte en jurídicamente obligatorios los objetivos de neutralidad climática, mientras que múltiples regulaciones sectoriales —como el paquete “Objetivo 55”— establecen estándares de emisiones, sostenibilidad y producción [Lupiola, 2023]. En este plano, el Estado interviene para imponer límites ecológicos a la acumulación, lo que puede traducirse en mejoras ambientales tangibles.

Por otro lado, el PVE despliega un conjunto de instrumentos orientados no a sustituir el mercado, sino a reorientarlo y adaptarlo a las exigencias de la crisis climática. A través de mecanismos de *de-risking*, como las asociaciones público-privadas y programas de inversión masiva —entre ellos la Política Agrícola Común (PAC) reformada y Next Generation EU, este último concebido como una suerte de “Plan Marshall” para la reconstrucción postpandemia [Kempf, 2024]—, el Estado asume parte del riesgo inicial de la transición con el objetivo de atraer capital privado hacia sectores verdes. En otras palabras, interviene activamente para crear las condiciones bajo las cuales la inversión sostenible se vuelve rentable.

En este sentido, las taxonomías verdes juegan un papel central: no regulan directamente la producción, sino que definen qué actividades pueden considerarse “sostenibles” y a su vez “rentables”, reorientando así los flujos financieros. Asimismo, instrumentos como el arancel climático (El Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono) o los estándares ambientales aplicados a importaciones extienden esta lógica más allá del espacio europeo, no solo buscando evitar la “fuga de carbono”, sino reconfigurando las condiciones de competencia global. En conjunto, cabe resaltar que todas estas medidas previamente mencionadas no eliminan la lógica de mercado capitalista, sino que la transforman: la protección ecológica se convierte en un criterio central de organización

económica y de reproducción del sistema. Lo verde, en otras palabras, debe convertirse en “negocio”. En este sentido —si lo verde es negocio—, el PVE no implica la desmercantilización de la naturaleza, sino su incorporación bajo nuevas formas de valorización y gobernanza. La naturaleza no deja de ser una mercancía ficticia, sino que pasa a estar regulada, medida y financiada bajo nuevos parámetros y otras prioridades.

Esta lógica se expresa con especial claridad en la estrategia “De la Granja a la Mesa” (F2F, por sus siglas en inglés), que constituye el componente agroalimentario del PVE y busca tanto mitigar el impacto como aumentar la resiliencia del sector. Sus objetivos —entre ellos la reducción del uso de pesticidas químicos en un 50% y de fertilizantes en al menos un 20% hacia 2030, la disminución de pérdidas de nutrientes en un 50%, la expansión de la agricultura orgánica hasta alcanzar el 25% de la superficie agrícola, la reducción del uso de antimicrobianos en un 50%, así como la promoción del bienestar animal y cambios en los patrones de consumo— reflejan un intento de reconfigurar de manera integral las cadenas agroalimentarias [Comisión Europea, 2019: 14-16; Michalak y Rydz-Żbikowska, 2022] y de re-incrustación de la naturaleza. Este enfoque responde a un diagnóstico ampliamente compartido: la agricultura es simultáneamente una causa relevante de la crisis ambiental [Hajdys, 2024: 176] y una de sus principales víctimas, al depender críticamente de los sistemas ecológicos que contribuye a degradar [Malhi, Kaur y Kaushik, 2021: 6-7].

Si bien la estrategia F2F no es jurídicamente vinculante en sí misma, su capacidad de incidencia no debe subestimarse. Por un lado, opera a través de mecanismos de presión normativa y difusión de estándares —el denominado “efecto Bruselas” [Bradford, 2021]; por otro, y de forma más directa, se articula con instrumentos vinculantes y financieros de la Unión Europea, particularmente la PAC. En este sentido, muchas de sus metas se traducen en criterios, condicionalidades y esquemas de financiamiento que sí tienen

efectos obligatorios o cuasi obligatorios para los productores, integrando de facto los objetivos de F2F en la gobernanza del sector agroalimentario europeo.

En este contexto, la transformación impulsada por F2F se ve adicionalmente reforzada por la taxonomía verde, que traduce estos objetivos en criterios operativos para la asignación de capital. En el sector agrícola, ello implica un sistema técnico de clasificación basado en filtros como la contribución sustancial, el principio de no causar daño significativo (DNSH) y salvaguardas sociales, así como en umbrales específicos sobre emisiones, uso de insumos, suelo, biodiversidad y agua. De este modo, prácticas sostenibles dejan de ser únicamente metas de política pública para convertirse también en condiciones de acceso al financiamiento.

A diferencia de la PAC, que opera principalmente a través de subsidios condicionados —que buscan “premiar” a los agricultores que adoptan prácticas verdes—, la taxonomía incide directamente sobre los flujos de inversión al definir qué actividades pueden ser consideradas “verdes” en términos financieros. Así, una explotación agrícola puede recibir apoyo público y, aun así, no ser reconocida como sostenible por los mercados si no cumple con estos estándares más exigentes y técnicamente definidos. En este sentido, la transición agroecológica no solo se regula ni se incentiva desde las instituciones supranacionales, sino que también se financia —o, en su caso, se restringe— en función de su alineación con una definición cada vez más precisa y tecnificada de sostenibilidad.

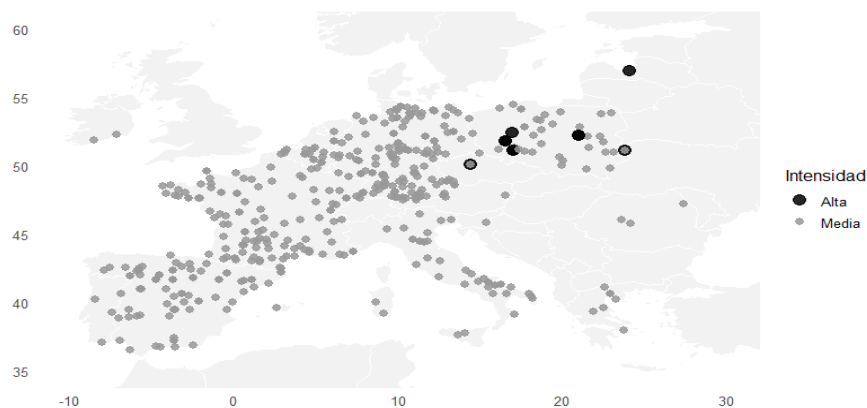
Ahora bien, incluso cuando esta transición es subsidiada y financiada, implica costos claros. Los costos de adaptación —cambios en prácticas, inversión o cumplimiento de estándares— son en gran medida inmediatos. En cambio, los beneficios económicos potenciales —como acceso a financiamiento más barato o nuevos mercados— suelen ser inciertos, tardíos o concentrados en actores con mayor capacidad de adaptación.

En este contexto, la transición ecológica deja de ser únicamente un problema técnico para convertirse en una cuestión profundamente política y distributiva. La coherencia del diseño institucional no implica neutralidad en sus efectos materiales. Por el contrario, la articulación entre F2F, la taxonomía y la PAC reconfigura las condiciones de producción de manera desigual, generando ganadores y perdedores dentro del sector y en la región.

Desde una perspectiva polanyiana, esto resulta particularmente relevante. Si bien estas políticas buscan re-incrustar la economía en límites ecológicos, lo hacen mediante mecanismos que también intensifican presiones sobre el trabajo y la producción. La protección de una mercancía ficticia —la tierra— puede así generar tensiones sobre otra —el trabajo—, especialmente cuando los costos de ajuste no son plenamente compensados.

Es precisamente en este punto donde emergen las resistencias, el descontento, la movilización y la protesta. El mapa 1 permite observar la amplitud territorial de estas reacciones del sector agrícola frente a la reconfiguración de las reglas del juego.

Mapa 1. Distribución geográfica de protestas agrícolas en Europa (2024)



Notas: Se muestran solo movilizaciones de tamaño medio y grande; las protestas de tamaño medio incluyen entre 200 y 999 participantes, mientras que las grandes superan los 1,000, con base en estimaciones de asistencia reportadas en los eventos.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos ACLED

Del mapa resulta evidente que las protestas de intensidad media —sin contar las movilizaciones de menor escala— se han extendido por toda Europa, con manifestaciones de alta intensidad visibles en Polonia. Además, estas protestas no se concentran en puntos específicos, sino que tienden a distribuirse a lo largo del territorio nacional de los países analizados. Este patrón indica que no se trata de conflictos aislados o localizados, sino de un contramovimiento de alcance amplio que atraviesa al sector agrícola europeo.

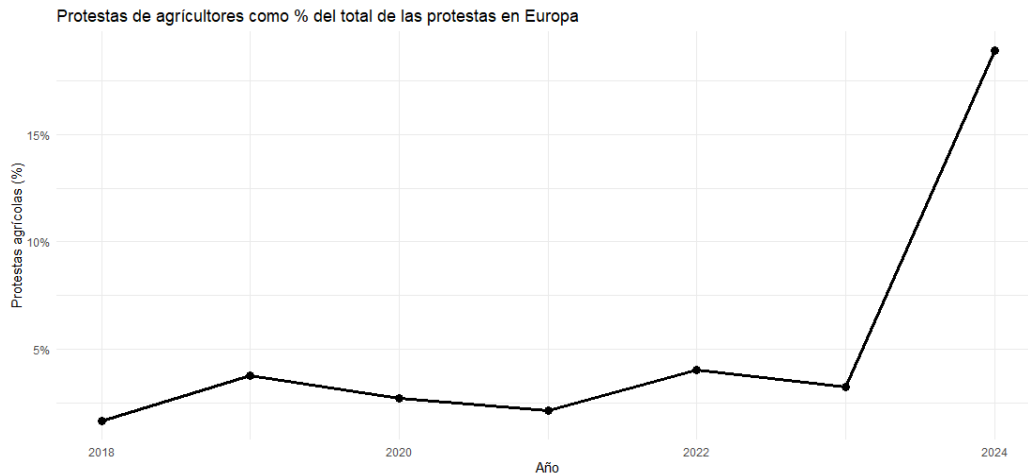
Sin embargo, como han señalado diversos estudios sobre el contramovimiento, la extensión territorial y la simultaneidad de las protestas no implican necesariamente la existencia de un actor cohesionado, organizado y con objetivos plenamente compartidos. ¿Hasta qué punto estas movilizaciones configuran un contramovimiento fuerte, capaz de articularse a escala europea e incidir de manera coordinada en la cadena agroalimentaria? ¿Se trata de un movimiento sin fronteras o, por el contrario, de una agregación de respuestas nacionales con lógicas propias? ¿Comparten realmente los agricultores un mismo conjunto de reivindicaciones?

Estas preguntas obligan a ir más allá de la aparente homogeneidad espacial observada en el mapa y a examinar con mayor detalle las demandas específicas en cada país.

IV. El contramovimiento agrícola europeo

Antes de examinar las demandas específicas, conviene observar la magnitud del fenómeno en términos agregados. La siguiente gráfica permite dimensionar la evolución y el peso relativo de las protestas agrícolas dentro del conjunto de la conflictividad social en Europa en el periodo estudiado. Mientras que en años anteriores estas representaban menos del 5% del total, en 2024 alcanzan más del 17%, evidenciando su creciente importancia.

Gráfica 1. Evolución de protestas de agricultores en Europa.



Fuente: Elaboración propia con base en ACLED data

El año 2024 resulta particularmente relevante, no tanto como punto de origen de estas tensiones, sino como un momento de visibilización de dinámicas que ya se venían acumulando desde la pandemia. Por un lado, comienzan a sentirse los efectos económicos e inflacionarios de la guerra en Ucrania. Por otro lado, estas presiones —derivadas de un choque externo—, se superponen con los cambios internos introducidos por la reforma de la PAC para el periodo 2023-2027, fuertemente influida por los objetivos del PVE y F2F previamente discutidos.

Sin embargo, esta nueva etapa no parte de cero y no se entiende plenamente sin considerar, aunque sea brevemente, la evolución histórica de la PAC. Desde su creación en 1962, el sistema se basó en mecanismos de apoyo a precios y producción —incluyendo precios mínimos garantizados y compras de intervención— que incentivaron la sobreoferta, al asegurar ingresos independiente de la demanda del mercado. Esto dio lugar a excedentes estructurales —los conocidos “lagos de leche” y “montañas de mantequilla” que inundaron el mercado europeo en los años setenta y ochenta—, ya que producir más no implicaba un riesgo económico para los agricultores.

A partir de la reforma de 1992, estos apoyos se desacoplaron progresivamente de la producción y se reorientaron hacia pagos directos menos vinculados al volumen producido, con el objetivo de que las decisiones productivas respondieran a las señales del mercado —como precios y demanda— y no únicamente a los incentivos de los subsidios [Adamowicz, 2021: 54-63]. Este proceso se consolidó con la Agenda 2000, que reorganizó la PAC en dos pilares: un primer pilar centrado en pagos directos y apoyos al mercado, y un segundo pilar orientado al desarrollo rural, ampliando así el enfoque más allá del apoyo a la producción. Posteriormente, las reformas de 2003 y 2013 incorporaron de manera progresiva objetivos ambientales, vinculando el acceso a los pagos al cumplimiento de determinadas prácticas ecológicas [Adamowicz, 2021: 54-63].

En su versión más reciente, esta trayectoria se profundiza con un giro más explícito hacia la sostenibilidad, incorporando nuevas exigencias que transforman no solo cuánto se produce, sino también cómo se produce. En términos concretos, la PAC reformada (para 2023-2027) introduce instrumentos como los eco-esquemas, que deben representar al menos el 25% de los pagos directos del primer pilar y buscan “premiar” a agricultores que opten por la adopción de prácticas sostenibles, al tiempo que refuerza la condicionalidad y supervisión asociada al financiamiento. Asimismo, alrededor del 40% del presupuesto total de la PAC se orienta a objetivos climáticos, junto con un 10% destinado a biodiversidad.

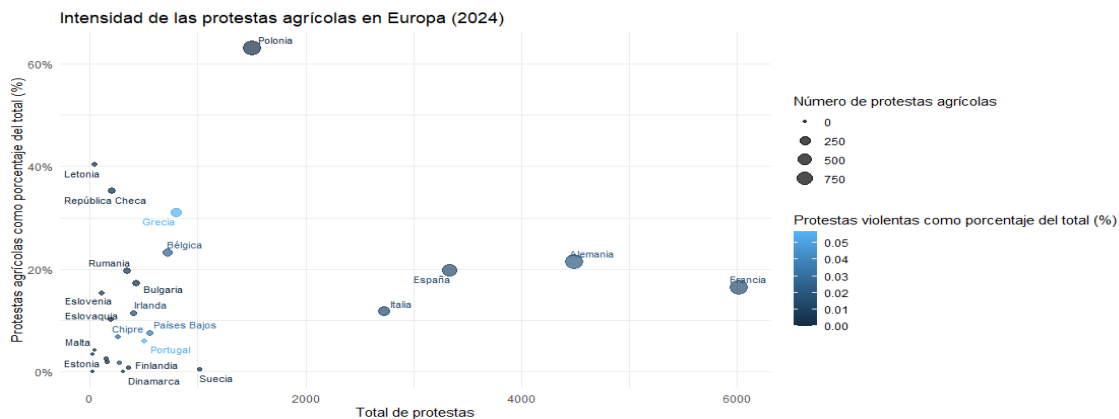
Este rediseño implica mayores exigencias de cumplimiento ambiental y adaptación productiva, cuyos costos no son plenamente compensados por los apoyos disponibles. Esto ocurre, además, en un contexto en el que el peso presupuestario de la PAC dentro de la UE ha disminuido de forma sostenida —de cerca del 70% del gasto total en la década de 1980 a alrededor del 23% en 2024 [Comisión Europea, 2024]—, lo que contribuye a intensificar la percepción de

desbalance entre obligaciones crecientes y recursos limitados [Poczta y Halasiewicz, 2024: 126].

A ello se suma un tercer elemento que convierte a 2024 en un año particularmente explosivo: la creciente politización de la transición verde en el contexto del ciclo electoral europeo. En el medio de las elecciones parlamentarias, tanto el PVE como la propia PAC reformada se han convertido en objetos de disputa y, al mismo tiempo, en herramientas de movilización política. Distintos actores —en particular fuerzas euroescépticas y de derecha— instrumentalizaron estos proyectos para canalizar el creciente descontento del sector agrícola, amplificando tensiones que ya venían acumulándose. En este contexto, los agricultores emergieron como un actor político relevante capaz de articular una voz común en torno a la necesidad de reorientar agenda verde, que resonó fuerte en los medios de comunicación europeos e internacionales [Matthews, 2024: 83].

No obstante, nos interesa aquí matizar la idea de un frente común. Si bien el repunte de las protestas sugiere una convergencia en la movilización (véase Mapa 1 y Gráfica 1), la evidencia comparada muestra una marcada heterogeneidad en su intensidad y configuración (véase Gráfica 2 y 3).

Gráfica 2. Intensidad de protestas agrícolas en Europa (2024)



Fuente: Elaboración propia con base en ACLED.

Como se observa en la Gráfica 2, la centralidad de las protestas agrícolas varía significativamente entre países: mientras que en algunos casos estas representan una proporción muy elevada del total de movilizaciones —como en Polonia, donde superan el 60%—, en otros, como Francia, España o Alemania, su peso relativo es menor (cerca del 20%), aunque el número absoluto de protestas sea considerablemente más alto que en periodos previos.

Esta divergencia sugiere que, en algunos contextos, las movilizaciones agrícolas dominan la conflictividad social y adquieren un carácter central dentro del contramovimiento, mientras que en otros se insertan en un entorno más amplio de protesta. A partir de ello, es pertinente examinar con mayor detalle los contextos específicos de los seis países con mayor número absoluto de protestas en 2024 —tanto agrícolas como de otro tipo— con el objetivo de identificar tanto los elementos compartidos como las divergencias en sus demandas y configuraciones.

Los resultados muestran que las protestas agrícolas en Europa no responden a un único factor, sino a la interacción de múltiples presiones que se superponen y se refuerzan mutuamente (véase Tabla 1 y Gráfica 3).

Tabla 1. Frecuencia y relevancia territorial de los temas identificados en las protestas agrícolas (2024)

Tema	Frecuencia	Países donde el tema es relevante (>10% de las protestas)
Competencia comercial	2109	Francia, Italia, Polonia, España
Política económica doméstica	2059	Alemania, Italia, Polonia, España
Pacto Verde Europeo y regulación ambiental	1434	Francia, Italia, Polonia
Contexto de Ucrania	1375	Polonia, España
Costos y precios agrícolas	975	Francia, Grecia, Italia
Presiones ambientales y territoriales	94	Grecia

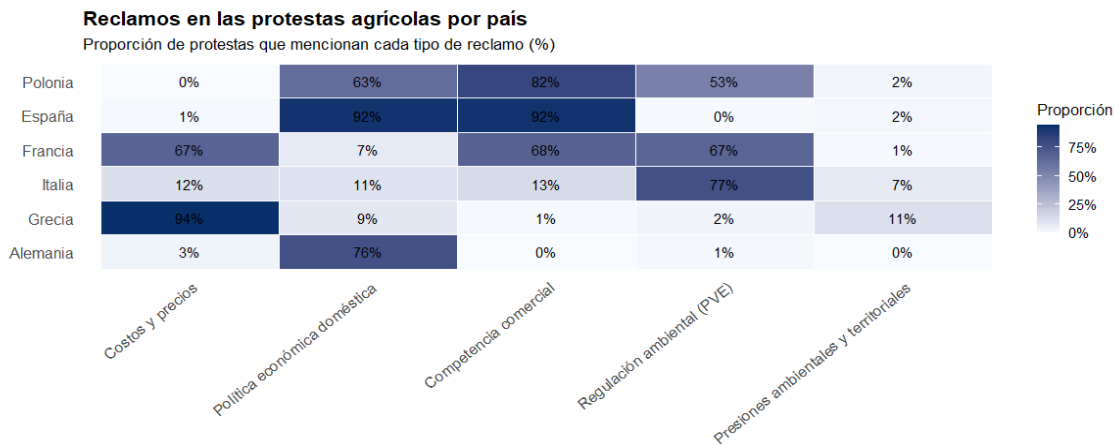
Notas: La frecuencia hace referencia al número de notas (eventos de protesta) en las que se detecta la presencia de cada tema mediante la aplicación del diccionario de palabras y

expresiones clave (véase Anexo 1); la cobertura del diccionario fue del 87.3% de los eventos analizados.

Fuente: Elaboración propia con base en ACLED.

A partir de estos resultados, emergen varias dimensiones interrelacionadas que estructuran el descontento agrícola en Europa. En primer lugar, destaca la competencia externa en un contexto de expansión comercial y geopolítica de la UE, que constituye el tema más frecuente y uno de los más extendidos territorialmente. En segundo lugar, la política económica doméstica aparece como un eje central, reflejando tanto demandas de apoyo como reacciones frente a su retirada. En tercer lugar, el cuestionamiento a los marcos regulatorios asociados al PVE y la agenda ecológica europea ocupa un lugar relevante, aunque con una distribución más concentrada en algunos países. Estas dimensiones no operan de manera independiente, sino que tienden a aparecer conjuntamente en el discurso de las protestas, configurando distintos patrones de descontento según el contexto nacional.

Gráfica 3. Reclamos de las protestas agrícolas por país



Notas: Expresado como proporción de notas sobre protestas que mencionan cada reclamo (como % del total)

Fuente: Elaboración propia con base en ACLED.

Como se observa en la Gráfica 3, las preocupaciones en torno a la competencia internacional constituyen uno de los elementos más

extendidos, especialmente en países como España y Polonia —donde las protestas que hacen referencia a este factor superan el 80%— y en Francia, donde también alcanzan niveles elevados (más del 60%). Sin embargo, aunque esta preocupación a primera vista aparece como un eje común —y potencialmente articulador de un movimiento agrícola supranacional—, su impacto dista de ser homogéneo dentro de la Unión Europea.

En términos polanyianos, la liberalización comercial europea —expresión del movimiento liberal— activa demandas de protección características del contramovimiento; no obstante, estas no se dirigen necesariamente hacia un mismo “enemigo”, sino que reflejan exposiciones diferenciadas a la competencia según la posición geográfica, productiva y comercial de cada país.

Por ejemplo, en el caso de los productos agrícolas ucranianos —cuya entrada se intensificó tras la decisión de la Unión Europea en 2022 de suspender aranceles y cuotas como parte de su respuesta a la invasión rusa [Matthews, 2024: 85] —, la proximidad geográfica contribuye a explicar su impacto particularmente agudo en países del este europeo como Polonia, donde el aumento de la oferta tuvo efectos inmediatos sobre los precios locales. Sin embargo, ello no implica que otros países más alejados no estén expuestos (véase Tabla 1). España, de hecho, se ha consolidado como el principal importador de grano ucraniano en los últimos años [Eurostat, s.f.], lo que se ha traducido en protestas agrícolas relacionadas directamente con este tema. No obstante, a diferencia del caso polaco —donde la preocupación “externa” se concentra de forma casi exclusiva en el eje ucraniano—, en España el descontento se articula de manera más amplia: junto a las demandas de limitar las importaciones provenientes del este, emerge con fuerza la oposición a nuevos acuerdos comerciales con terceros países.

En este punto, España converge con preocupaciones presentes en Francia e Italia, donde destaca la resistencia frente al acuerdo UE-

Mercosur, aún en negociación en 2024 y finalmente concretado en 2026, fuente de una nueva oleada de protestas (aunque esta queda fuera del alcance del presente artículo). Aunque los efectos de este tipo de apertura comercial son todavía en gran medida esperados más que observados, su potencial impacto se percibe como significativo y temido. Sin embargo, al igual que en el caso del grano ucraniano, estos efectos pueden variar según la estructura productiva y contexto específico de cada economía: incluso volúmenes relativamente limitados de importación pueden generar presiones importantes en sectores sensibles, debido a diferencias en costos de producción, estándares ambientales y condiciones regulatorias. De este modo, la preocupación por la competencia no responde únicamente a magnitudes o volúmenes comerciales, sino a la percepción de vulnerabilidad sectorial frente a productores que operan bajo reglas distintas.,

Esta percepción se conecta directamente con la segunda dimensión identificada en diversas protestas a lo largo y ancho de Europa: el cuestionamiento a los marcos regulatorios asociados al PVE. En varios países —notablemente Francia, Polonia e Italia— los agricultores expresan preocupación por el endurecimiento de las normas ambientales. En este punto, el contramovimiento agrícola puede ser interpretado —de forma simplificada— como una manifestación de la “composición peligrosa” descrita por Standing [2014: 971], en la que pueden emerger reacciones radicales y regresivas contrarias al bienestar animal y “bienestar” del planeta, así como actitudes consideradas insolidarias o, incluso, racistas frente a socios externos, que en ciertos contextos pueden articularse con discursos populistas y extremistas. Sin embargo, esta lectura tiende a oscurecer las problemáticas subyacentes que estructuran sus reclamos.

En Francia, el descontento parece girar alrededor de la creciente carga administrativa sobre el sector, donde los agricultores tienen que convertirse en “burócratas” y hacer cada vez más trabajo de

oficina para obtener o preservar apoyos [Mroczkowska, 2022: 70]. Pero el punto va más allá del aspecto burocrático y se centra, sobre todo, en el contenido mismo de las regulaciones, que bajo la PAC reformada se han vuelto más exigentes y más vigiladas. A través de la denominada condicionalidad reforzada, el acceso a los pagos directos queda sujeto al cumplimiento de un conjunto de estándares ambientales estrictos, conocidos como Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (BCAM). En términos prácticos, esto implica que una parte creciente de la actividad agrícola deja de estar determinada únicamente por decisiones productivas o de mercado, y pasa a estar condicionada por criterios ambientales definidos a nivel supranacional.

Entre las medidas más controvertidas destacan aquellas que limitan el uso productivo de la tierra o introducen cambios obligatorios en las prácticas agrícolas, uso de pesticidas, nitratos y bienestar animal. Por ejemplo, la protección de determinados ecosistemas sensibles restringe el aprovechamiento de ciertas superficies; la exigencia de rotación de cultivos sustituye esquemas previos más flexibles; y la obligación de destinar parte de la tierra a fines no productivos busca fomentar la biodiversidad, pero reduce el área disponible para la producción – generando pérdidas tangibles para los agricultores. Estas exigencias son percibidas no solo como costosas, sino también como asimétricas en un contexto de apertura comercial (ya sea hacia el Este o el Cono Sur). En consecuencia, los agricultores enfrentan lo que puede interpretarse como una “doble presión”: por un lado, mayores exigencias regulatorias internas; por otro, una creciente exposición a la competencia externa bajo condiciones menos estrictas.

No obstante, al igual que en el caso de la competencia comercial, esta segunda dimensión —el cuestionamiento de la regulación asociada al Pacto Verde— tampoco se manifiesta de manera totalmente homogénea. Hay que recordar que los costos y retos asociados con la transición varían significativamente entre países,

en la medida en que no todos parten del mismo nivel de sostenibilidad en sus sistemas agroalimentarios [Ricciolini *et al.*, 2024]. En este sentido, el caso polaco resulta particularmente ilustrativo. Junto con países como Rumanía, Bulgaria y Letonia —donde la proporción de protestas agrícolas respecto al total también es elevada (véase Gráfica 2) —, Polonia se sitúa entre aquellos con menores niveles de sostenibilidad, lo que implica, desde el inicio, transformaciones más profundas para alinearse con los objetivos del PVE. Estas brechas estructurales no solo requieren mayores esfuerzos y costos de adaptación, sino que también tienden a generar resistencias más intensas.

En tercer lugar —y como resultado de las presiones anteriores—, la dimensión económica aparece como un eje transversal en la mayoría de los países analizados. El aumento de los costos de producción —particularmente en energía, fertilizantes y otros insumos clave— se menciona de forma sistemática en las protestas, con especial claridad en casos como Grecia, Francia e Italia. Si bien también se observan referencias a presiones a la baja sobre los precios de productos específicos (como leche, vino o miel), estas son menos generalizadas. En conjunto, la presión económica no puede atribuirse a un único factor, sino que refleja la interacción entre dinámicas geopolíticas y cambios en el marco regulatorio europeo.

En este contexto, emerge un cuarto eje transversal compartido a nivel regional, pero determinado en gran medida a escala nacional: la demanda de un mayor apoyo estatal. En prácticamente todos los países analizados, los agricultores reclaman medidas de respaldo de sus respectivos gobiernos, que incluyen subsidios, compensaciones, alivios fiscales o mecanismos de protección frente a shocks económicos y ambientales.

En el sur de Europa, particularmente en Grecia, Italia y España, los choques ambientales —como sequías, inundaciones o escasez de

agua— aparecen con mayor frecuencia, reflejando su mayor vulnerabilidad climática. Estas preocupaciones suelen ir acompañadas de demandas de apoyo y compensación por parte de los gobiernos nacionales para mitigar sus efectos.

En el caso alemán, el reclamo se dirige principalmente contra la retirada de apoyos estatales, como la reducción de subsidios a la agricultura y medidas fiscales como los recortes al diésel agrícola o la eliminación de exenciones tributarias. En Italia, se observa una mayor presencia de discursos vinculados a la defensa de la producción nacional —el *Made in Italy*— y de la soberanía alimentaria.

Este elemento compartido —el reclamo de un Estado más presente— resulta particularmente relevante desde una perspectiva polanyiana, ya que pone de manifiesto que la existencia de estructuras supranacionales —como la Unión Europea— no sustituye la expectativa de protección por parte del Estado nacional. Por el contrario, la transición verde y la apertura comercial parecen reforzar la demanda de intervención pública como mecanismo de estabilización, aunque en ocasiones esta resulte en tensión con directivas supranacionales.

V. Reflexiones finales

Este trabajo ha analizado la transición verde europea desde una perspectiva polanyiana, mostrando que su Pacto Verde no puede entenderse de manera unívoca como un contramovimiento orientado a proteger la naturaleza. Si bien introduce mecanismos regulatorios evidentes y ambiciosos que buscan limitar los efectos de la mercantilización, su implementación a través de instrumentos de mercado y lógicas de competitividad implica también una reconfiguración de las condiciones de acumulación, en la que lo “verde” se integra como nuevo espacio de valorización. Hemos mostrado, además, que esta protección de la tierra no está exenta de

costos para productores y puede dar lugar a nuevas reacciones sociales, como el contramovimiento agrícola analizado en este estudio.

En conjunto, los resultados sugieren que las protestas agrícolas en Europa deben entenderse como expresiones de una tensión estructural más amplia, aunque no homogénea. Si bien no se puede concluir sobre la existencia de un contramovimiento plenamente articulado a escala supranacional que no “respete” fronteras y comparta exactamente los mismos intereses, las movilizaciones responden a problemáticas comunes —en particular, la combinación entre una mayor regulación ambiental y una creciente apertura comercial hacia socios que no operan bajo los mismos estándares—, lo que se traduce en presiones sobre costos y precios.

En este sentido, aunque el contramovimiento aparece fragmentado y configurado nacionalmente, ha logrado adquirir resonancia; no obstante, el alcance de su incidencia en el proceso político requiere ser analizado con mayor profundidad en futuras investigaciones. En este trabajo, solo es posible señalar que las protestas han contribuido a debilitar la agenda verde europea, incluyendo la paralización de la propuesta sobre pesticidas, la flexibilización de algunas disposiciones ambientales de la PAC [Castro, 2024], así como la inclusión de frenos institucionales y salvaguardias en el acuerdo con el Mercosur. Estos desarrollos sugieren que, aun sin constituir un frente unificado supranacional, los contramovimientos agrícolas han tenido efectos tangibles en la reconfiguración del equilibrio entre la regulación ambiental, la liberalización económica y la protección social.

En este sentido, una línea clave para futuras investigaciones consiste en analizar con mayor detalle el cómo se articulan estos dos procesos: por un lado, los intentos de reconfigurar la relación entre economía y naturaleza mediante la protección de la tierra; por otro, las respuestas sociales orientadas a mitigar los efectos distributivos

de esta transición sobre los sectores más afectados. En particular, resulta necesario profundizar en la posición de los agricultores dentro de esta transformación, situados en una encrucijada entre su creciente centralidad como agentes de la transición verde —en su condición de productores en la base de la cadena agroalimentaria— y las restricciones estructurales que limitan su capacidad de adaptación.

En este marco, resulta igualmente relevante incorporar una perspectiva geoeconómica que permita examinar cómo la transición verde se entrelaza con dinámicas de competencia internacional, política comercial y reconfiguración de cadenas globales de valor, incidiendo en la distribución de costos y beneficios entre regiones y sectores.

Bibliografía

- Adamowicz, M. [2021]. Europejski Zielony Ład a „zazielenienie” rolnictwa i Wspólnej Polityki Rolnej. *Wies i Rolnictwo*, v.192, n. 3, pp. 49-70.
- Adler, P. S. [2015]. Book review essay: The environmental crisis and its capitalist roots: Reading Naomi Klein with Karl Polanyi—Naomi Klein: This changes everything: Capitalism vs. the climate.
- Arrighi, G. y Silver, B. [2003]. Polanyi’s ‘double movement’: The belle epoques of British and US hegemony compared. *Politics and Society*, v. 31, pp. 325–355.
- Ascari, G., Colciago, A., Haber, T. i Wöhrmüller, S. [2025]. Inequality along the European green transition. *The Economic Journal*.
- Babb, S. y Kentikelenis, A. E. [2018]. International financial institutions as agents of neoliberalism. *The SAGE handbook of neoliberalism*, v. 1, pp. 16-27.
- Borón, A. [2003]. El pos-neoliberalismo: un proyecto en construcción. La trama del neoliberalismo. *Mercado, crisis y exclusión social*, v. 2.
- Bradford, A. [2021]. The Brussels Effect. *Northwestern University Law Review*, v. 107, n. 1, pp. 1–64.
- Castro, I. [2024]. La UE echa el freno a la agenda verde ante la presión de los agricultores. *El Diario*. [en línea]. [Consulta: 6 de abril 2026].

- Disponible en: https://www.eldiario.es/economia/ue-echa-freno-agenda-verde-presion-agricultores_1_10900424.html
- Ceceña, A. E. [2009]. El posneoliberalismo y sus bifurcaciones. *Espacio crítico*, v. 10, pp. 1-12.
- Comisión Europea. [2019]. Comunicación de la comisión al parlamento europeo, al consejo europeo, al consejo, al comité económico y social europeo y al comité de las regiones: El Pacto Verde Europeo. *El Pacto Verde Europeo COM/2019/640 final*, pp. 1-40.
- Comisión Europea. [2024]. *Gasto de la PAC: Comisión Europea, Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural [informe financiero]*. [Consulta: 3 de abril 2026]. Disponible en: https://agriculture.ec.europa.eu/data-and-analysis/financing/cap-expenditure_es
- Dávalos, P. [2014]. El posneoliberalismo: apuntes para una discusión. *Encuentros Latinoamericanos [segunda época]*, v. 8, n. 2, pp. 196-215.
- Evans, P. [2008]. Is an alternative globalization possible? *Politics and Society*, v. 36, pp. 271–305.
- Fraser, N. [2014]. Can society be commodities all the way down? Post-Polanyian reflections on capitalist crisis. *Economy and society*, v. 43, n. 4, pp. 541-558.
- Güven, A. B. [2018]. Whither the post-Washington Consensus? International financial institutions and development policy before and after the crisis. *Review of International Political Economy*, v. 25, n. 3, pp. 392-417.
- Hajdys, D. [2024]. The European Green Deal and the Opportunities and Risks of Organic Farming in Poland. *Finanse i Prawo Finansowe*, v. 2, n. 42, pp. 171-190.
- Kempf, E. y. [2024]. nGEU: A new Marshall Plan for Europe and a template for Global Finance.
- Levien, M. i Paret, M. [2012]. A second double movement? Polanyi and shifting global opinions on neoliberalism. *International Sociology*, v. 27, n. 6, pp. 724-744.
- Lupiola, A. G. [2023]. . Nuevas estrategias de la Unión Europea para abordar el doble reto de la crisis climática y la dependencia energética. *Cuadernos Europeos de Deusto*, n. 68, pp. 33-67.
- Malhi, G. S., Kaur, M. y Kaushik, P. [2021]. Impact of climate change on agriculture and its mitigation strategies: A review. *Sustainability*, v. 13, n.3, pp. 1-21.

- Matthews, A. [2024]. Farmer Protests and the 2024 European Parliament Elections. *Intereconomics*, 59, n. 2, pp. 83-87.
- Michalak, D., y Rydz-Żbikowska, A. [2022]. Jakie działania są niezbędne dla sprostania wyzwaniom zielonego ładu i uczynienia go szansą dla polskiego rolnictwa? En M. Burchard-Dziubińska, *W poszukiwaniu zielonego ładu* [pp. 262-283]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
- Mroczkowska, J. [2022]. Trapped in the grey zones: voicing discontent and strategies of resistance in rural Poland. *Ethnologia Polona*, v. 43.
- Poczta, W. y Halasiewicz, A. [2024]. *Polska wieś 2024. Raport o stanie wsi. 20 lat w Unii Europejskiej*. FDPA. Varsovia: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
- Polanyi, K. [2007 [1944]]. *La Gran Transformación. Crítica del liberalismo económico*. Madrid: Ediciones de La Piqueta.
- Polanyi-Levitt, K. y Seccareccia, M. [2018]. Neoliberalismo: La perspectiva polanyiana. *Ola Financiera*, v. 11, n. 31, pp. 1-21.
- Ricciolini, E., Rocchi, L., Paolotti, L., Gennari, N., Ottaviani, A., de la Rúa, F. R., y Boggia, A. [2024]. Sustainability of European agri-food supply chain using MRP-PCI multicriteria analysis method. *Agricultural and Food Economics*, v. 12, n. 1, pp. 11.
- Ruggie, J. G. [1982]. International regimes, transactions, and change: embedded liberalism in the postwar economic order. *International organization*, v. 36, n. 2, pp. 379-415.
- Sandbrook, R. [2022]. Polanyi's double movement and capitalism today. *Development and Change*, v. 53, n. 3, pp. 647-675.
- Standing, G. [2014]. Understanding the New Precariat through Labour and Work. *Development and Change*, v. 45, n. 5, pp. 963-980.
- Stiglitz, J. E. [2008]. Is there a post-Washington Consensus consensus? *The Washington Consensus reconsidered: Towards a new global governance*, n. 46.
- Stuart, D., Gunderson, R. i Petersen, B. [2019]. Climate change and the Polanyian counter-movement: Carbon markets or degrowth? *New political economy*, v. 24, n. 1, pp. 89-102.

Recibido 30 de abril 2026

Aceptado 18 de mayo 2026